

Chillán, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Se reproduce la sentencia en alzada, con la siguiente modificación:

Se elimina el párrafo final del basamento Décimo Segundo.

Y se tiene en su lugar y, además, presente:

1º.- Que, ambas partes deducen recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva de autos de cinco de julio de dos mil veintidós, por la cual se resolvió rechazar las excepciones de reparación satisfactiva y de prescripción deducidas por el demandado Fisco de Chile, y en cuanto al fondo, acoge parcialmente la demanda y condena al Fisco de Chile a pagar a título de daño moral, la cantidad de \$15.000.000 (quince millones) a doña Claudia Lorena Cifuentes Manríquez, más los reajustes e intereses que se indican en la decisión II de la parte resolutive del fallo, sin costas.

2º.- Que, la parte demandante solicita se confirme la sentencia en alzada con declaración que se eleva el monto indemnizatorio determinado por el tribunal a quo, a la suma de \$50.000.000, a título de indemnización por el daño moral que se le ha causado a raíz de la detención de que fue objeto su madre doña Fidelisa del Carmen Manríquez Ramírez, ocurrida en septiembre de 1973, habiendo experimentado sufrimiento por el alejamiento que significó la detención de ella, y el estado de soledad y desprotección en que quedó, demostrándose ello en inseguridades y traumas.

3º.- Que, a su vez la parte demandada deduce recurso de apelación por el Fisco de Chile, por cuanto sostiene que el fallo causa agravio al haber desestimado la excepción de reparación satisfactiva que se opuso oportunamente, la que fundó en los beneficios otorgados por la Ley 19.123, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, modificada por la Ley 19.980 que estableció a favor de las personas familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos o de violencia política, una serie de otros beneficios sociales que se otorgaron a familiares más próximos de la víctima, y que la recurrente estima que son incompatibles con toda otra indemnización.

Seguidamente, esgrime la impugnante, y como segundo agravio, que la sentenciadora del grado rechazó la excepción de prescripción extintiva opuesta por su parte, respecto de la acción indemnizatoria, la que fundó primeramente en el artículo 2332, y en subsidio, la contemplada en los artículos 2514 y 2515 todos del Código Civil, esgrimiendo al efecto que la acción deducida por la actora se extinguió por prescripción mucho antes de su interposición y notificación de la demanda a su



parte.

Finalmente, expresa que un tercer agravio se produce debido a la suma exagerada que fija el tribunal a título de indemnización de daño moral, sosteniendo además que éste no ha sido debidamente acreditado.

4º.- Que, para la adecuada resolución del presente arbitrio, y en cuanto a la reparación satisfactiva que habría obtenido la actora, y que no fue considerada por la sentencia impugnada, necesario es consignar que la Ley N°19.123, que crea la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, concede pensión de reparación y otorga otros beneficios a los afectados, pero en caso alguno establece tal incompatibilidad, sin que sea procedente suponer que la referida ley se dictó para reparar todo daño moral inferido a las víctimas de los derechos humanos ante la evidencia de que las acciones para obtener aquello se encontrarían a la fecha prescritas. Se trata, en consecuencia, de dos formas distintas de reparación y que las asume el Estado, no significando en modo alguno la renuncia de una de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare, por los medios que autoriza la ley, su procedencia. De hecho, el propio artículo 4º de la Ley N°19.123, refiriéndose en parte, a la naturaleza y objetivo de la misma, expresa que *“En caso alguno la Corporación podrá asumir funciones jurisdiccionales de los Tribunales de Justicia ni interferir en procesos pendientes ante ellos. No podrá, en consecuencia, pronunciarse sobre la responsabilidad que, con arreglo a las leyes pudiere haber a personas individuales.*

Si en el cumplimiento de sus funciones la corporación tuviere conocimiento de hechos que revistan caracteres de delito, deberá ponerlos, sin más trámites, en conocimiento de los Tribunales de Justicia”.

A lo expuesto, debe añadirse que en el caso de marras y tal como lo consigna la sentencia de primer grado en el párrafo final del basamento Décimo, *“En autos no se rindió prueba alguna de haber otorgado el demandado algún tipo de prestación a la actora”.*

De lo que se viene diciendo fluye entonces, que Claudia Lorena Cifuentes Manríquez, no ha sido beneficiaria de prestaciones estatales específicas derivadas de la detención de su madre Fidelisa Manríquez Ramírez y la pareja de esta José Guevara Iribarra, ambos reconocidos a través del Informe de la Comisión Nacional sobre Política y Tortura, como víctimas de privación de libertad y torturas por razones políticas.

En el contexto descrito, no resulta procedente estimar –como lo pretende la parte demandada- que los beneficios asignados por ley a la señora Manríquez y al señor Guevara, puedan abarcar la reparación que merece la actora, toda vez que entenderlo de esa manera conduce a invisibilizar las vivencias traumáticas que



padeció siendo una niña de menos de cinco años de edad, cuya vida se vio drásticamente alterada, constituyendo aquello un quiebre vital con secuelas emocionales que persisten hasta hoy.

5º.- Que, desde otro ángulo, y en relación al reproche efectuado por la recurrente de no haberse acogido la excepción de prescripción de la acción indemnizatoria por el transcurso del tiempo, cuatro años contados desde la fecha de comisión del delito conforme lo dispone el artículo 2332 del Código Civil, o de cinco de acuerdo a lo establecido en el artículo 2514, en relación al artículo 2515 del mismo cuerpo legal, se dirá que tratándose de un delito de lesa humanidad cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no es posible sujetar la acción civil indemnizatoria a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil, como lo sostiene la recurrente en su presentación.

6º.- Que, desde otra perspectiva, y en cuanto al reproche que efectúa la recurrente relativo a que la indemnización otorgada por el Tribunal es excesiva, no habiéndose acreditado, a su parecer, el daño moral, forzoso es señalar que los antecedentes probatorios de la causa permiten tener por cierto la existencia de un daño extra patrimonial, el que debe ser resarcido en toda su extensión, es decir, ha de ser proporcional al perjuicio causado y derivar necesariamente del hecho que lo genera, límites que en este caso se satisfacen con la prueba analizada, la que permitió tener por asentado que la actora sufrió daño moral como consecuencia de haber sufrido el alejamiento de su madre, producto de la detención de que ella fue objeto por agentes del Estado, lo que le originó un estado de soledad, desprotección, traumas e inseguridades en su vida.

7º.- Que, en mérito a lo señalado en las motivaciones precedentes, esta Corte estima prudente regular el monto que debe pagarse a la demandante, en la suma de \$30.000.000.-, reajustado en la forma que se dirá en lo resolutivo de este fallo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, **SE CONFIRMA** la sentencia de apelada de cinco de julio de dos mil veintidós, **CON DECLARACIÓN**, que se eleva la suma que a título de daño moral se ordena pagar a la demandante, Claudia Lorena Cifuentes Manríquez, a la cantidad de \$30.000.000.- (treinta millones de pesos), más los reajustes e intereses que se indican en la sentencia en alzada.

En lo demás apelado **se confirma** la referida sentencia.

Redacción a cargo del abogado integrante Juan Antonio De La Hoz Fonseca.



ROL 517-2022-Civil.



Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Chillan integrada por Ministra Paulina Gallardo G., Fiscal Judicial Solon Rodrigo Viguera S. y Abogado Integrante Juan De La Hoz F. Chillan, veintiseis de septiembre de dos mil veintitres.

En Chillan, a veintiseis de septiembre de dos mil veintitres, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

